

ENSAYOS

PRIMERA ETAPA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA: CONDICIONES REVOLUCIONARIAS Y CAÍDA DE PORFIRIO DÍAZ, 1910—1911

Santiago Portilla

Entre quienes estudian el Estado mexicano actual difícilmente hay quien niegue que el origen de su formación es la Revolución Mexicana, entendiéndola como la década 1910-1920. Hablar de momentos de consolidación posteriores no invalida el reconocimiento anterior. En el estudio de esos años es fácil advertir cuatro etapas: 1910-1913, caída del viejo régimen y gestión del gobierno democrático; 1913-1914, golpe militar, dictadura y lucha constitucional contra ella; 1914-1916, lucha de facciones: proyecto de Estado y aspiraciones populares, y 1917-1920, primer gobierno constitucional, pacificación y caudillismo. Si bien las rebeliones armadas no terminaron ahí, sí fue la última vez que el poder cambió de manos por esa vía.

La primera pregunta sobre ese decenio es: ¿en qué condiciones se inició la Revolución y cómo cayó el régimen de Porfirio Díaz? El presente ensayo intenta dar respuesta a esa pregunta.*

En 1908 prácticamente nadie en México pensaba que Porfirio Díaz pudiera ser derrocado por las armas, excepto los militares del Partido Liberal Mexicano, cuyos jefes principales, con Ricardo Flores Magón a la cabeza, se encontraban exiliados en Estados Unidos. Sin embargo, el viejo presidente presentó su renuncia en mayor de 1911, obligado por una insurrección nacional que estaba por destruir su ejército.

Desde 1909, como preparación para las elecciones generales de 1910, surgieron algunas organizaciones políticas de oposición al régimen porfirista. Para los propósitos de este ensayo baste considerar las dos corrientes más importantes, el reyismo y el antirreelecciónismo.

Los orígenes del primero se remontan a los primeros años del siglo, cuando empezó a manifestarse una escisión entre los grupos porfiristas que dominaban por

completo la escena política. La división se hizo patente en 1904, a propósito de la designación para la vicepresidencia, que había sido restablecida. Dos fueron los personajes que se mencionaron como posibles para ocupar el puesto: el general Bernardo Reyes, que poco antes había sido secretario de Guerra y a la sazón era gobernador de Coahuila y comandante de la tercera zona militar (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), y Ramón Corral, exgobernador de Sonora y secretario de Gobernación; a Corral lo apoyaba el personaje más importante del gabinete y enemigo más notable de Reyes: el secretario de Hacienda José Ives Limantour, cabeza del grupo conocido como los "científicos".

En 1909 revivió la disputa con intensidad. Como seis años antes, los dos grupos no ponían en duda la presidencia del general Díaz; luchaban por la vicepresidencia. Pero esta vez esa lucha tenía una trascendencia mayor, pues la edad avanzada del Presidente hacía probable su muerte durante el siguiente sexenio, con lo que el vicepresidente sería el sucesor virtual. Nuevamente la competencia fue entre Corral y Reyes.

La candidatura de Ramón Corral fue la primera en ser formalizada, en una asamblea del Club o Partido Reeleccionista, agrupación formada por quienes se alineaban con los "científicos". En el Círculo Nacional Porfirista se encontraban quienes apoyaban a Bernardo Reyes. Las dos organizaciones eran las encargadas de reelegir a Díaz con el beneplácito y promoción oficiales. En 1909 no se permitió al Círculo Nacional Porfirista nominar a Reyes. Durante su convención, que deseaba esperanzada el visto bueno del Presidente a su candidato, Díaz envió su decisión, que era una orden inapelable en favor de Corral. Además, fueron los representantes del círculo quienes ofrecieron formalmente las candidaturas de la fórmula Díaz-Corral, el 2 de abril.

Como esa fecha era todavía lejana a las elecciones, los reyistas buscaron otras instancias de organización, confiando en que el Presidente cambiaría su parecer. Desde fines de 1908 algunos de ellos, entre quienes había diputados federales, habían formado el Partido Democrático. Éste, sin declararse abiertamente reyista, tenía esa orientación, esperando hacer su nominación en una convención. Después de abril, sin embargo, ellos mismos, junto con otros reyistas, formaron clubes en algunas regiones del país para sostener abiertamente la candidatura del general Reyes.

* Para el estudio documental y narrativo del mismo problema, remito al lector a mi trabajo *Una sociedad en armas: insurrección antirreeleccionista en México, 1910-1911*. Tesis, El Colegio de México, 1982.

Que hayan aparecido estas organizaciones debe destacarse porque se trata de porfiristas (su fórmula electoral era Díaz-Reyes) que rebasan las instancias oficiales para promover sus intereses políticos; una oposición nacida de las filas mismas del régimen es el resultado más relevante de la escisión de los grupos dominantes y del carácter monolítico de las decisiones gubernamentales. Otro hecho importante es la amplitud que alcanzó ese movimiento. Participaron en él, principalmente, sectores medios de la población, en regiones del centro y el norte del país; por sus antecedentes, Reyes tenía muchos simpatizantes en el ejército, y en 1909 lo secundaron algunos grupos de oradores. En varios lugares del país hubo mítines y manifestaciones. En algunas ocasiones se dio el caso de que actos preparados por corralistas fueron boicoteados y convertidos en reyistas.

Acaso el dato más interesante del reyismo es que fue un movimiento sin cabeza. Aun cuando sus promotores más importantes eran conocidos por su cercanía con el general Reyes, y su hijo, el licenciado Rodolfo Reyes, se contaba entre ellos, el viejo militar nunca aceptó públicamente la candidatura que se le ofrecía. Atento a los deseos del Presidente, rechazó reiteradamente la oferta. Como sus partidarios persistieran, hizo una declaración definitiva en ese sentido. Simultáneamente, Díaz le hizo ver la conveniencia de que se alejara temporalmente de México, con la consecuencia de que sus amigos quedarían desprotegidos si insistían en organizarse para las elecciones. Reyes fue enviado a Europa con una comisión menor y en la gubernatura y zona militar fue sustituido por el general Jerónimo Treviño, enemigo político que de inmediato se dedicó a disolver las bases del poder reyista en la región. Los organismos reyistas optaron entonces por disolverse. Esto ocurría en septiembre de 1909.

Que el reyismo haya crecido intensamente en poco tiempo y haya tenido la fuerza para poner en alarma a los corralistas, aun con la renuencia pública del general Reyes, indica que en sectores amplios de la población privaba el deseo de un cambio, aunque fuera aparentemente menor como la vicepresidencia. La participación posterior de muchos reyistas en otro partido refuerza esta idea.

Toda la maquinaria política fiel a Limantour y a Corral se había movilizó en contra de los reyistas, considerando la fuerza del exsecretario de Guerra. En cambio, habían subestimado otra corriente que había iniciado su organización en mayo, y estaba desarrollándose tan ampliamente como el reyismo. Un hacendado coahuilense, Francisco I. Madero, que había participado en 1905 en la política estatal, era el alma del Centro Antirreeleccionista de México. Había ini-

ciado una serie de giras de propaganda, con actos muy concurridos.

El programa antirreeleccionista era sencillo: sobre la base de que México estaba en riesgo de verse sometido indefinidamente a un régimen de poder absoluto si se permitía la imposición de Ramón Corral, había que organizar clubes en todo el país, para después realizar una convención nacional en la que se nominarían candidatos a presidente y vicepresidente. El primero, en la mente de los dirigentes, podría ser Porfirio Díaz sólo si éste aceptaba ser postulado con un independiente, para que la elección vicepresidencial fuera libre. Pero en principio el antirreeleccionismo se refería también a la presidencia.

Gracias al ferrocarril, Madero hizo cuatro giras por varios estados cada una. Además, dedicó una exclusivamente a Coahuila. Recorrió aproximadamente dos terceras partes del país. En varios estados encontró resistencia de las autoridades, que impedían la realización de actos políticos. Aun entonces Madero establecía contactos para canalizar a los independientes locales. En donde el reyismo había prendido, convocó a los reyistas a que se le unieran, lo que logró en buena medida.

Con su actividad intensa y con la partida de Reyes, Madero se perfiló como la única figura de la oposición que llegó a ser conocida en casi todo México. En abril de 1910 se efectuó la Convención Antirreeleccionista, con representación de casi todos los estados y dos organizaciones afines. Asistieron ciento veinte delegados, cada uno con derecho a un voto por cada quinientas firmas o fracción que llevara su credencial. Haciendo un cálculo sobre el número de votos para la elección de candidatos, el mínimo de antirreeleccionistas representados era de treinta y cinco mil. De la convención salió el Partido Nacional Antirreeleccionista, unificado y con candidatos propios, pues en una plática entre Madero y Díaz éste se negó incluso a hablar de asuntos políticos, con lo que se cerró la posibilidad de una transacción.

Conforme se aproximaban las elecciones, programadas para el último domingo de junio y primero de julio, la represión se acentuó. En numerosos lugares fueron encarcelados dirigentes y militantes antirreeleccionistas y muchos se escondieron o se exiliaron. El 4 de junio Madero emprendió su segunda gira como candidato presidencial. Fue ovacionado en estaciones del trayecto, en San Luis Potosí, en Saltillo y en Monterrey, aun con la oposición de autoridades y policía, insuficientes ante el número de partidarios. Al día siguiente de su llegada a Monterrey, el 7 de junio, Madero fue aprehendido frente a la casa de su padre; se le acusó primero de encubrir la fuga de su compañero

Roque Estrada y, después, de insultar al Presidente en el discurso que había pronunciado en San Luis Potosí. Se le mantuvo preso indefinidamente.

A pesar de que el gobierno federal y los locales mostraban claramente cuál era su posición frente a la participación electoral de los antirreeleccionistas, el día de las elecciones primarias se presentaron a las urnas numerosos votantes independientes. Pero los porfiristas recurrieron a numerosas formas de fraude, auxiliados por las autoridades, desde ocultar el lugar en que se instalaron las urnas, hasta el uso de la fuerza armada para alejar a los antirreeleccionistas de las casillas, y aprehensiones. La fórmula oficial fue declarada vencedora prácticamente por unanimidad. Por cierto, este tipo de resultados era considerado por Madero como síntoma de la inexistencia de una democracia. Madero fue conservado en prisión, con lo que el régimen parecía suponer que su figura podía ser explosiva todavía, en lo que no andaba errado. En general, sin embargo, para los porfiristas el resultado electoral fue el fin del peligro antirreeleccionista. Pasadas las elecciones los presos fueron casi todos paulatinamente liberados.

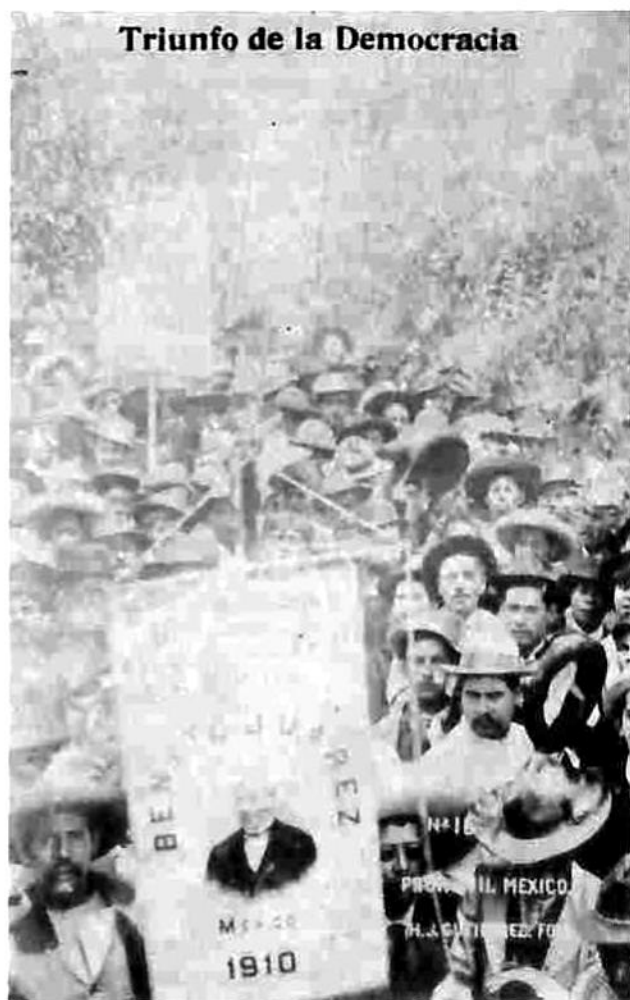
Cuando se celebraron los comicios ya eran intensos los preparativos para celebrar el centenario de la Independencia. A los cien años de independencia se agregó el brillo apoteótico y heroico de treinta años de gobierno porfirista, con el que México entraba por derecho propio al gran mundo de las naciones modernas. Fueron invitados, y llegaron, representantes ceremoniosos de todo el mundo, hasta de los remotos países orientales, que fueron alojados en el lujo deslumbrante de la aristocracia mexicana. Durante todo septiembre y los primeros días de octubre fueron testigos de innumerables fiestas, ceremonias e inauguraciones de todo tipo. Fue la consagración internacional del "orden y progreso" con el "héroe de la paz", Porfirio Díaz, en la cúspide del reconocimiento.

El régimen no advirtió lo que habían significado la participación electoral y el fraude. La respuesta dada por el nuevo Congreso a un inmenso memorial de los antirreeleccionistas por el que solicitaban la anulación de las elecciones fue un escueto "no ha lugar". El memorial estaba compuesto por cientos de testimonios de todos los estados; a cada uno se le agregaron las referencias precisas a las leyes electorales infringidas por los porfiristas. Pero este proceso legal ya no era el objetivo más importante de los antirreeleccionistas: empezaron a preparar el terreno para una insurrección armada.

Por debajo del triunfalismo oficial, la respuesta del régimen a una organización nacional se volvió en su contra como una crisis política, en la medida que

empleó la fuerza y frustró la participación civil. La actividad política entre 1909 y 1910 no tenía precedentes en el periodo porfirista, ni lo tenía una oposición nacional unificada. Por eso el fraude electoral hizo más evidente la ruptura de la legalidad por parte del gobierno; la convicción no necesitaba más, pues había sido característica del porfiriato el uso y abuso de los códigos legales para la monopolización del poder. Para los opositores perseguidos había quedado muy claro que su acción podía justificadamente tomar otras vías. Se trataba de una crisis de legitimidad.

Justo cuando se concentraban la atención, la satisfacción y el cansancio del régimen, al finalizar la gran celebración secular, el 5 y 6 de octubre respectivamente, Madero y Estrada se fugaron de San Luis Potosí, ciudad que tenían por cárcel en libertad caucional. Cruzaron la línea fronteriza y llegaron a San Antonio, Texas, donde se reunieron con los principales dirigentes antirreeleccionistas.



Madero llevaba esbozado un plan para convocar al pueblo a una insurrección armada en contra de las autoridades generales, con el argumento básico de la evidente inconstitucionalidad de su representación a partir del fraude en las elecciones. Con ayuda de sus correligionarios en pocos días se dio forma definitiva al plan, que fue fechado el 5 de octubre en San Luis Potosí. Se imprimieron cuarenta mil ejemplares, cuya distribución se hizo mediante correos a diversas partes del país, aprovechando la red tejida en la organización electoral.

Conforme se avanzó en esa organización, Madero se trazó un plan optimista, al que dedicó la mayor parte de sus esfuerzos y sus recursos. Se trataba de golpes rápidos que darian el control casi inmediato de Puebla, Pachuca y la ciudad de México, donde pensaba que lo secundaría una parte del ejército. Esto levantaría de inmediato una insurrección general, con lo que en dos o tres meses el país estaría bajo control de los insurgentes. Por su parte, él se pondría en el norte de Coahuila al frente de un ejército reforzado por el levantamiento general, incontenible.

Sin embargo, el plan se descubrió en los primeros días de noviembre. Se puso una vigilancia estrecha sobre los antirreleccionistas de la ciudad de México, que estaban bajo el mando del ingeniero Alfredo Robles Domínguez, y pronto se descubrió que estaban comprando armas, y algunas conexiones con personas de Hidalgo, Puebla y Guerrero. Las aprehensiones por estos descubrimientos en la capital y en Pachuca hicieron que se pusiera en alerta a las autoridades locales, que iniciaron investigaciones sobre los antirreleccionistas, cuando los había.

Las pesquisas en Puebla llegaron al jefe de la policía a practicar un cateo en la casa de Aquiles Serdán, pues sospechaban, acertadamente, que éste había regresado a esa ciudad ocultamente. En ese momento Serdán y sus hermanos repartían armas entre una veintena de conjurados; había doscientos rifles, con su respectivo parque. La resistencia obligada hizo presente al ejército y se desató un asalto que fue resistido varias horas, hasta que casi todos los defensores fueron muertos; entre éstos había mujeres y niños. Si bien lo de los niños no se supo públicamente, la noticia se esparció por todo el país, dramáticamente.

En estas condiciones, el 20 de noviembre hubo trece pronunciamientos, siete de ellos en Chihuahua. El mismo día, el intento de Madero de pasar a México fracasó, pues de trescientos hombres supuestos se presentaron sólo diez y los conjurados de la población fronteriza cercana, ciudad Porfirio Díaz, tampoco cumplieron su parte del plan por haber sido descubiertos.

Simultáneamente, las autoridades norteamericanas dictaron orden de aprehensión contra Madero, y éste se vio forzado a disfrazarse y ocultarse; se dirigió con uno de sus hermanos a Nueva Orleans, con sentimientos encontrados. Por un lado, el desaliento lo llevaba a pensar que había fracasado y lo mejor sería desistirse. Por otro, su convicción del estado político de México lo sostenía; planeaba hacerse de armas y un bote y desembarcar en alguna parte del Golfo de México. También lo sostuvieron noticias de Chihuahua, donde la rebelión parecía haber prendido, con éxitos sobre fuerzas del ejército federal.

Aunque no como Madero lo pensara, el proceso insurreccional se había iniciado. A partir de Chihuahua, donde se sostuvo constante, se fue extendiendo primero a los estados adyacentes, después a otras regiones. En Veracruz hubo hechos constantes, pero de diversos grupos sin mucha conexión ni fuerza. Tabasco también fue afectado en diciembre. En los primeros dos meses, fuera de Chihuahua, hubo pocos grupos persistentes y las victorias en enfrentamientos fueron casi siempre para las tropas gobiernistas. Esta relación fue cambiando en los meses posteriores, en la medida en que aparecieron nuevos grupos en zonas del centro y el sur. A base de experiencias bélicas tentativas y de unión entre grupos cercanos, los rebeldes acumulaban fuerza.

No podemos continuar sin preguntarnos sobre el origen profundo de la movilización insurreccional. Apparentemente es consecuencia de la lucha política. Pero antes vimos que los organizadores de esa lucha se beneficiaron, a su vez, de una corriente de opinión generalizada que deseaba el cambio. A su convocatoria electoral respondieron principalmente sectores sociales de las ciudades mayores y otras poblaciones relativamente importantes en el país. Los dirigentes de los clubes antirreleccionistas fueron, si bien con algunas excepciones, personas ilustradas y de posición social media y alta. Eso explica que para Madero el levantamiento ocurriría primero, y sobre todo, en ciudades importantes. Pero esto no fue así y en el proceso de insurrección se advierte una participación de signo contrario, en que los actores fueron más población rural, de sectores populares. Si bien la jerarquía general se mantuvo entre los primeros líderes políticos y lo mismo se puede decir de casi todas las estatales, aparecen jefes militares de extracción popular, o cuando menos rural, con dominio local; en el caso de Chihuahua, con una coordinación efectiva desde el principio. Los soldados revolucionarios eran en su mayoría campesinos, rancheros, mineros y peones ferrocarrileros.

¿Cómo se puede explicar esta nueva participación, que en última instancia decide la posibilidad de la rebelión armada? Por un lado, cabe la posibilidad de que a pe-



sar de la poca participación en la etapa política de sectores rurales y populares, también hayan sido sensibilizados por la campaña antirreeleccionista y por la represión en las elecciones; pero es difícil pensar que las banderas electorales y la represión de un movimiento ajeno fuera motivo suficiente para que se levantaran en armas. Una razón más profunda puede encontrarse en el modelo porfiriano de modernización sin democratización.

Desde antes de Porfirio Díaz los liberales buscaban aplicar en México los sistemas vigentes en los países ya para entonces industrializados, tanto en lo económico y administrativo como en lo político y gubernativo. En lo económico, se buscaba la industrialización en base a la libre empresa; dado que los sistemas productivos modernos tenían que ser importados se hizo necesaria la participación del gobierno como promotor de la economía. En lo político, se quería un régimen democrático con ejercicio efectivo de garantías individuales.

Cuando Porfirio Díaz llegó al poder, en 1876, en la economía mundial se iniciaba el auge de la expansión financiera de los países capitalistas europeos y de Estados Unidos, un elemento que hacía inevitable una ma-

yor vinculación de México a la producción internacional. Otro aspecto fundamental de ese momento era la estabilidad política interna alcanzada a partir del triunfo liberal sobre franceses y conservadores. Esta dicotomía: estabilidad y flujo de capital extranjero, determinó el carácter básico del porfiriato. Está traducida en su lema "orden y progreso".

El orden se alteró momentáneamente en 1872 y 1876 por rebeliones de Porfirio Díaz. Contra Benito Juárez no tuvo éxito, pero sí contra Sebastián Lerdo de Tejada. La bandera en los dos casos fue la implantación de la no reelección. Como presidente, Díaz continuó el proyecto de desarrollo liberal en cuanto a la aspiración de implantar los sistemas productivos modernos. El excedente de capitales producidos por los países centrales le amplió enormemente las posibilidades de esa modernización. Díaz vio que era necesario dar facilidades y garantías para la inversión de aquellos recursos en el país. Sin embargo, la política económica no rinde frutos a corto plazo. Por esta razón, unida a la idea de que todavía no se podía confiar en un sistema político en que se alternara el mando democráticamente, Díaz decidió continuar con el poder para asegurarse el éxito de su proyecto. En otros términos, sacrificó la modernización política por la económica.

Los logros del desarrollo porfiriano son notables: se tendió una red amplia de ferrocarriles, se recuperó la minería, aumentaron las exportaciones de minerales y algunos productos agrícolas, creció el mercado interno, se ordenaron las finanzas públicas, se equilibró la balanza comercial, se superó el déficit del presupuesto, se desarrollaron parcialmente algunas industrias manufactureras. En el terreno agrario se optó por estimular la creación de grandes unidades productivas; la decisión tenía un aspecto político, que era la continuidad de las Leyes de Reforma en lo referente a imponer como regla universal la propiedad privada.

Este dinamismo económico tuvo repercusiones importantes en la estructura social: aparecieron nuevos grupos sociales, como el de los ferrocarrileros, peones y operadores; otros crecieron, como el de los mineros y, en menor escala, el de los obreros industriales, así como los sectores medios, administradores, profesionales y empleados; otros se fortalecieron, como los hacendados, los exportadores y los extranjeros capitalistas; otros fueron debilitados, como los campesinos de comunidades cuyas tierras pasaron a ser propiedad privada, y aun dispersados en dos sentidos: forzados a emigrar por la falta de tierra y ocupación, y aniquilados o deportados cuando presentaron resistencia a los proyectos modernizadores.

La negación, en lo político, de la bandera original antirreeleccionista llevó al abuso de la ley para justificar la permanencia del Presidente y los gobernadores en el poder. El mismo esquema se repitió a nivel local con los jefes políticos, que dejaron de ser elegidos para ser nombrados por el Presidente, dándoseles preeminencia sobre los municipios. La monopolización del poder fue causa y efecto de una concentración paralela de la riqueza. Además, impidió que los sectores sociales afectados negativamente por el desarrollo porfiriano tuvieran representación política en la toma de decisiones.

En los primeros años del siglo se dio una declinación paulatina en los precios de los productos que México exportaba. La caída de mayores consecuencias fue la del precio de la plata. Entre 1907 y 1908 hubo una crisis financiera internacional. En México se redujo la actividad minera y disminuyó el ritmo de construcción de ferrocarriles, a lo que se añadieron malas cosechas. Aumentó el flujo de migración de mano de obra al norte del país y al sur de Estados Unidos, pero la crisis había afectado las posibilidades de empleo en esas regiones. Las tensiones sociales se hicieron más agudas, pero no tenían vías de expresión política.

También algunos sectores beneficiados en general por el desarrollo encontraron cerradas las puertas al poder, ya fuera por sus ideas políticas o por tener intere-

ses encontrados con los de grupos hegemónicos. Fue el caso de personas de la clase media y aun de medianos y grandes propietarios. La educación y posibilidades de estos sectores, sobre todo en las poblaciones importantes, los hacía más concientes de la necesidad de organizarse políticamente. Esto explica el éxito, primero, del reyismo y, después, del antirreeleccionismo en la lucha electoral, y las condiciones sociopolíticas del desarrollo en el porfiriato explican la respuesta que provocó el llamado a las armas entre sectores rurales y populares. Estas características generales se expresaron en cada caso según la dinámica socioeconómica y política estatal o regional. En Chihuahua, por ejemplo, el acoso desde fines del siglo XIX del clan gobernante Terrazas-Creel sobre tierras de comunidades independientes (sobre todo de colonias militares) y la pérdida de derechos municipales determinaron la resistencia de los afectados por la política estatal, su participación en clubes antirreeleccionista durante 1909-1910 y su coordinación efectiva, a pesar de divisiones internas, para la insurrección en 1910-1911. La dirigencia política en la entidad estuvo a cargo de Abraham González, administrador de empresas que pertenecía a una familia políticamente importante en el estado.

La respuesta inmediata del régimen a la insurrección fue insuficiente. Militarmente, ante los brotes en Chihuahua de los primeros tres días de noviembre, se pensó en México que las autoridades locales, con el auxilio de hacendados y comerciantes, podrían reclutar fuerzas para oponer a los rebeldes. Los primeros triunfos de Pancho Villa y Pascual Orozco, y la incapacidad general de las autoridades locales para levantar su propia defensa, obligaron pronto a enviar fuerza federal. En conjunto, se pensó que setecientos cincuenta hombres serían suficiente refuerzo para controlar la situación en el estado.

Políticamente, Porfirio Díaz aceptó la iniciativa de un grupo de chihuahuenses, entre los que se encontraba un pariente de Abraham González, para negociar con los insurrectos y terminar políticamente el conflicto. El intento no prosperó por las exigencias de los rebeldes y porque los hombres fuertes del estado, Enrique C. Creel y Alberto Terrazas, se opusieron a la conciliación. Creel era secretario de Relaciones Exteriores y gobernador constitucional de Chihuahua. Aunque ausente, Terrazas era el heredero del mayor poder económico en la entidad. Convencieron al Presidente de que sería mejor usar la fuerza para acabar con los grupos alzados y así escarmentarlos. Terrazas fue nombrado gobernador interino en sucesión de José María Sánchez, de quien se sospechó que había consentido la misión del grupo conciliador. Asimismo, fue sustituido el jefe de la zona militar correspondiente.

Entre diciembre y enero se enviaron a Chihuahua soldados hasta completar más de cinco mil, aproximada-

mente una cuarta parte de todo el ejército. Las operaciones militares del gobierno se ejecutaron bajo el mando directo y lejano del presidente Díaz, quien asumió la dirección de la campaña desde el principio.

Esa centralización no se correspondía con la jerarquía que operaba en el terreno. Con pocas excepciones, los contingentes federales que entraron en acción, no sólo en Chihuahua, estaban formados por fracciones de distintas unidades. Cada batallón estaba repartido en varios lugares. Ese fraccionamiento se acentuó por necesidad, pues inicialmente los revolucionarios actuaban en grupos pequeños en varias regiones, y se mandaban contingentes proporcionales a enfrentarlos.

Además, el ejército mostró otras debilidades: la mayor parte de sus efectivos eran de infantería, lo que le restaba eficacia frente a grupos montados, especialmente en zonas alejadas de las vías férreas; no era frecuente que los jefes y oficiales conocieran el terreno en que actuaban; en varias ocasiones el mando fue torpe, especialmente en lo referente a la persecución del enemigo y a la información sobre sus movimientos; los soldados, reclutados a fuerza, carecían del espíritu suficiente para sostener una campaña cuyo teatro de operaciones se amplió a casi todo el país, contra un enemigo móvil.

Por su entrenamiento, la capacidad de combate de los soldados federales era mucho mayor que la de los insurgentes. Éstos tuvieron a su favor una moral de combate más elevada y, sobre todo, el apoyo de la mayor parte de la población civil. Entre febrero y abril de 1911 se multiplicaron los grupos rebeldes; en el último mes hubo acciones en dieciocho estados. El ejército no fue suficiente siquiera para mandar refuerzos a todos los lugares donde prendió la rebelión. Además, en varias regiones se dio un proceso de concentración de grupos y de amenazas a poblaciones cada vez más importantes, incluidas las capitales de algunos estados. Desde marzo, la iniciativa estaba definitivamente en manos de los insurgentes y los federales estaban a la defensiva.

El ejército porfirista se había mostrado en las fiestas del Centenario muy bien pertrechado, con armamento moderno alemán y francés, como uno de los símbolos de la estabilidad y de la modernización. En aquella ocasión también desfilaron contingentes de policía rural en trajes de gala. Las dos fuerzas eran, efectivamente, un pilar importante del sistema, que cumplían con eficacia la tarea de enfrentar las resistencias sociales al proyecto de desarrollo.

El ejército no era grande; ni estaba todo tan bien equipado como los que desfilaron en el Centenario; de hecho, su número había disminuido en el porfiriato,

aunque a cambio se le había incluido en el proceso de modernización, dotándolo de armamento y mejorando su sistema educativo; fue el primer paso importante hacia la profesionalización de las fuerzas armadas. El régimen era civilista, no militarista, a pesar de que Díaz había ganado su prestigio como militar. Sin embargo, su ejército fue suficiente para los retos que se presentaron, siempre circunscritos a una zona o región determinada. Sus limitaciones se hicieron patentes sólo frente a una insurrección de sectores sociales que hasta entonces habían sido pacíficos, en lugares dispersos, primero en Chihuahua y el Norte, y después en casi todo el país. Esta debilidad relativa frente al movimiento armado fue un estímulo para la proliferación de grupos rebeldes.

El gobierno se puso a la defensiva también políticamente. Al terminar enero dio un nuevo giro en Chihuahua, donde Terrazas fue sustituido por Miguel Ahumada, cuyo propósito era lograr una negociación con los rebeldes. Fue el primero de cuatro cambios de gobernadores muy impopulares. En marzo el gabinete fue renovado casi totalmente, medida que no tuvo ningún efecto pacificador, pues entre los nuevos secretarios no se incluyó a ningún representante de los insurrectos. El primero de abril Díaz anunció ante el Congreso medidas que retomaban las banderas principales de los antirreeleccionistas: restablecimiento, en la Constitución, del principio de no reelección, reforma de las leyes electorales y fraccionamiento de grandes propiedades agrarias. El desprestigio del régimen era tal que todos estos gestos de aveniencia fueron interpretados como signos de debilidad y sus efectos fueron contrarios a la pacificación.

Entre abril y mayo de 1911 se multiplicaron las zonas en conflicto. También se hizo estable el dominio rebelde de algunas regiones; las poblaciones ocupadas eran crecientemente importantes. En todas fueron destituidas las autoridades políticas y generalmente se sustituyeron con personas cuando menos afines al movimiento. El dominio territorial de los federales se redujo considerablemente. En algunos estados sólo retuvieron la capital; en los que había más actividad el campo quedó prácticamente en poder insurgente. Es la imagen de una crisis político-militar.

Los elementos mencionados como componentes de esa crisis se circunscribieron a México. Pero hubo otro, de carácter externo, fundamental para la insurrección: la vecindad de Estados Unidos, en particular la frontera de ese país con el nuestro.

Con el siglo XX se inició una intensificación de la emigración de trabajadores mexicanos al mercado laboral norteamericano, que en poco tiempo sobrepasaron el número de los mexicanos "viejos", es decir, los

descendientes de quienes habitaban California, Arizona, Nuevo México y Texas antes de 1848. Entre 1900 y 1910 se duplicó el número de mexicanos que vivían en Estados Unidos. Los trabajadores se empleaban en plantaciones, huertas, minas y tendido de ferrocarriles, principalmente; una buena parte de esa emigración era estacional, por lo que constantemente había mexicanos que cruzaban en ambos sentidos la línea fronteriza. A ese movimiento laboral se agregó uno político, de perseguidos por el gobierno porfirista.

A finales de 1903 los dirigentes del Partido Liberal Mexicano se vieron forzados al exilio. Desde allá lanzaron un programa de reformas y convocaron a un levantamiento armado para luchar por ellas. En 1907 se instalaron en los Ángeles, California, y a los pocos meses fueron encarcelados por dieciocho meses; poco después de obtener su libertad fueron metidos otra vez en prisión, de donde salieron el 3 de agosto de 1910, poco menos de cuatro meses antes de la insurrección antirreeleccionista.

La prensa que los liberales sostuvieron tenazmente, con cortas interrupciones, difundió, tanto en ambos lados de la frontera como en muchos lugares de México, una ideología combativa que denunciaba en tonos sombríos las injusticias del régimen y proclamaba la necesidad de combatir a la tiranía. Los lectores de **Regeneración**, **Revolución** y **Punto Rojo** fueron muchos y muy variados. Los escasos hechos de armas que protagonizaron los liberales en 1906 y 1908 fueron ampliamente divulgados.

El número de expatriados en Estados Unidos aumentó considerablemente en 1910 con los antirreeleccionistas que huían de la represión desatada a raíz de la lucha electoral. Estos se concentraron en San Antonio, Texas, a donde también llegó Francisco I. Madero después de fugarse de San Luis Potosí. El mercado de armas norteamericano era muy amplio, sobre todo en la frontera, donde era común su posesión y los agentes de las fábricas viajaban continuamente de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. La libertad de ese comercio hacía fácil adquirir pertrechos discretamente. Los antirreeleccionistas aprovecharon esa facilidad y metieron a México armas y parque de contrabando; era el origen del arsenal de los Serdán en Puebla. También hicieron una campaña de reclutamiento en las poblaciones fronterizas norteamericanas.

Cuando los porfiristas descubrieron el proyecto subversivo solicitaron de inmediato a las autoridades estadounidenses la aprehensión de las cabezas visibles bajo el cargo de violación a las leyes de neutralidad; las pruebas aparentemente irrefutables, eran el Plan de San Luis Potosí y una proclama que lo acompañaba, en que se invitaba al ejército a unirse a la rebelión. Sin

embargo, las gestiones no tuvieron la respuesta que esperaba el gobierno mexicano.

El Departamento de Estado hizo ver al embajador en Washington que en ese país había libertad total de expresión y que las ideas políticas, no importaba cuáles fueran, podían difundirse por todos los medios. Lo único que se podía hacer era vigilar para evitar que se formaran grupos armados en territorio norteamericano para invadir el país vecino. Conforme se acercó el 20 de noviembre, fecha fijada para estallar el movimiento, Madero fue más estrechamente vigilado. Su desaparición el 18 motivó que se dictara orden de aprehensión en su contra, que logró burlar. Más tarde, Madero dejó de ocultarse en Nueva Orleans y se fue a la zona de El Paso, Texas, para estar más cerca de los hechos en Chihuahua. Ahí fue detectado en febrero, por lo que se vio forzado a internarse en territorio mexicano; este hecho fue un incentivo para la aparición de nuevos grupos insurgentes en varios puntos del país.

Descontando a Madero, los principales organizadores antirreeleccionistas en el exilio permanecieron libres durante la insurrección. Abiertamente hacían una propaganda intensa; clandestinamente, hacían acopio de armas y parque, contrabando de lo mismo y reclutamiento. Contaban con el mejor auxilio que se puede tener: una simpatía muy amplia de la población fronteriza, tanto mexicanos como norteamericanos, y de una buena parte de la prensa. Hubo algunos casos de aprehensiones, por violación a la neutralidad, de soldados y jefes rebeldes sorprendidos en flagrante contrabando o armados en compañía del lado norteamericano. Pero se trataba de una justicia aplicada siempre de manera individual; después de algunas diligencias se podía salir generalmente con una fianza, aunque hubo quienes no pudieron pagarla. Este procedimiento se amparó siempre en los estatutos de neutralidad norteamericanos, que no podían usarse en contra de los derechos individuales básicos.

Esta neutralidad del gobierno estadounidense no se aplica sólo por su legalismo. Internamente, pesaba la opinión pública que favorecía la insurrección y una situación política en que la mayoría en el Congreso era demócrata, siendo republicano el Presidente, William H. Taft. En relación a Porfirio Díaz, se había enfriado el aprecio que se le tenía por algunas decisiones que afectaron intereses de Estados Unidos: la nacionalización de los ferrocarriles, el acercamiento a los capitales europeos, el retiro de la concesión de la bahía Magdalena, Baja California, y el asilo concedido al presidente Santos Zelaya, depuesto en Nicaragua con apoyo norteamericano.

Por su parte, los antirreeleccionistas no se limitaron en aquel país a la propaganda y fomento clandestino de la

sublevación. Casi desde el principio nombraron un representante en Washington que promoviera su causa ante el gobierno y ante el cuerpo diplomático. Respalaban su posición con un respeto total por las propiedades estadounidenses en el teatro de operaciones. Aunque nunca fueron recibidos oficialmente por autoridades norteamericanas, sí llegaron a ganarse su confianza cuando el fin de Porfirio Díaz estaba próximo.

Con informe de los cónsules norteamericanos en México, recibidos por el Departamento de Estado en febrero, en los que se decía que el proceso de insurrección estaba en marcha y había un descontento general, el presidente Taft decidió movilizar en los primeros días de marzo veinte mil soldados a la frontera, previendo la posibilidad de una intervención, para proteger a los norteamericanos en México y sus propiedades. Esto provocó un gran impacto en México, sobre todo en las esferas oficiales. A partir de ese momento la posible intervención fue un temor constante, lo que contribuyó a que el gobierno buscara una salida negociada a la crisis.

Simultáneamente a la movilización de la tropa norteamericana, se envió un cuestionario a los cónsules en México pidiéndoles información sobre número de revolucionarios y soldados porfiristas, número de norteamericanos y valor de sus propiedades susceptibles de ser destruidas, y capacidad de los mismos para defenderse de turbas hostiles mientras llegaba auxilio de su país. De las respuestas se puede hacer la siguiente síntesis: prácticamente en todas partes existía un descontento generalizado que de un momento a otro podría derivar en brotes armados; donde ya los había, los insurrectos cobraban fuerza y los soldados gobiernistas perdían terreno; con muy pocas excepciones, los norteamericanos no habían sufrido perjuicios en las zonas en conflicto, además de la suspensión de algunas de sus actividades, y lo más importante: casi unánimemente los cónsules pensaban que una intervención del ejército estadounidense sería lo peor para los intereses norteamericanos, pues consideraban que si ocurriera los bandos mexicanos olvidarían sus diferencias para combatir la invasión; añadían que en cuanto ésta se iniciara se desatarían asesinatos en masa de norteamericanos y destrucción de sus propiedades. Entonces se decidió en Washington no intervenir en México militarmente, aunque sin hacerlo público.

Las posibilidades de organización en la frontera norteamericana, la simpatía general hacia los exiliados e insurgentes y la actitud de las autoridades entre la neutralidad y la intervención dieron un margen de acción a los rebeldes, sin el cual su lucha hubiera sido, cuando menos, mucho más difícil.

En mayo los contingentes federales más importantes estaban concentrados en algunas de las principales

ciudades, a la defensiva, con el movimiento revolucionario en plena efervescencia. Su destrucción era cuestión de poco tiempo. El 10 de mayo fue tomada ciudad Juárez, Chihuahua, por la fuerza mejor organizada y pertrechada de los insurrectos, al mando de Francisco I. Madero. Agua Prieta, Sonora, fue ocupada al día siguiente por abandono de la tropa federal asediada. Estas poblaciones fronterizas dieron, con sus aduanas, elementos nuevos de financiamiento y mejores condiciones para adquirir armas en Estados Unidos. El 15, después de una semana de asedio y combates intensos, cayó Torreón, Coahuila, que era un centro ferrocarrilero estratégicamente importante. En el sur, el 14, fueron ocupadas Chilpancingo e Iguala, Guerrero, sin combatir, y el 19, en Xalitla, fueron sorprendidos y capturados con toda su impedimenta y armas los quinientos federales que antes habían burlado el sitio de Chilpancingo. También el 19 cayó Cuautla, Morelos. Varios gobernadores escribieron a Porfirio Díaz sobre el poco control que tenían de sus estados; el de Puebla, uno de los recién nombrados, solicitó que se le aceptara la renuncia.

Los sectores sociales privilegiados, a los que el gobierno acudió para su defensa, no respondieron sino minimamente. También muchos entre los favorecidos por el régimen estaban desencantados del mismo y pensaban que era conveniente un cambio para romper el monopolio del poder a nivel federal, estatal y local. Los pocos grupos de defensa civil que se organizaron fueron militarmente incompetentes, con muy contadas excepciones. Por el contrario, el apoyo a los insurrectos era generalizado y por lo común eran bien recibidos o aceptados en las poblaciones o zonas que llegaron a controlar.

Estos hechos militares y sociales tuvieron sus correspondientes políticos en el cambio del gabinete en la segunda quincena de marzo y en el reconocimiento que hizo el Presidente de las demandas revolucionarias el primero de abril. Los ofrecimientos de su discurso fueron seguidos, a los pocos días, de una misión discreta y extraoficial para entablar contactos con los dirigentes antirreeleccionistas y explorar las posibilidades de negociar el fin de la insurrección. Además de las medidas anunciadas, los enviados llevaban autorización para ofrecer casi la mitad de las gobernaturas, puestos en el gabinete y nuevos diputados y senadores de los estados que fueran cedidos. Fueron primero a Washington a entrevistarse con el doctor Francisco Vázquez Gómez, representante del gobierno provisional insurgente en esa ciudad, quien los escuchó con frialdad y los encaminó hacia Madero. El 20 de abril llegaron a El Paso, Texas. La ciudad contigua del lado mexicano, ciudad Juárez, se encontraba asediada; la tropa al mando de Madero había completado el cerco el día anterior y se aprestaba para el ataque.

Por negociación de Vázquez Gómez con el embajador de México en Washington se acordó una tregua para entablar pláticas de paz. Al cabo de unos días, en que Madero vaciló en cuanto a la exigencia de que renunciaran el Presidente y el vicepresidente, cedió ante los enviados oficiosos del gobierno. Entonces se nombró un representante oficial, con autorización plena para pactar con delegados de la insurrección, el magistrado Francisco Carvajal, quien llegó a ciudad Juárez el 2 de mayo. Pero a última hora Madero cambió nuevamente su decisión, presionado por sus principales colaboradores y sus propias dudas. Carvajal no estaba facultado para tratar la renuncia presidencial, por lo que se rompió la negociación el 4 de mayo.

El día 7, sin embargo, el peso de la expansión del movimiento armado a casi todo el país hizo que Porfirio Díaz reconociera en un manifiesto la posibilidad de su

retiro, con lo que hubo una nueva base para dialogar. Pero antes de que se reanudaran formalmente las pláticas los soldados revolucionarios iniciaron espontáneamente el ataque a ciudad Juárez, el día 8; Madero no pudo evitarlo y tuvo que ordenar el ataque general. La plaza fue rendida dos días después, con las consecuencias y en la situación ya expuesta. El 21 de mayo el Presidente aceptó renunciar en un lapso de diez días, pero lo hizo el 25, cuando ya su casa era apedreada por manifestantes que exigían a gritos la renuncia. Seis días después se embarcó en Veracruz rumbo a Europa. Así terminó una época que nueve meses antes había sido celebrada como la consagración en México del progreso y de la estabilidad política. Ese final del porfiriato fue también el comienzo de la Revolución Mexicana.

La insurrección antirreeleccionista y la caída de Porfirio Díaz se deben, en síntesis, a la concurrencia de los



siguientes elementos diversos: un desarrollo económico y político esencialmente concentrador de la riqueza y el poder; una contradicción entre el dinamismo económico y el anquilosamiento político —modernización sin democratización; una escisión en dos de los grupos políticos dominantes, que disputaban la sucesión del viejo Porfirio Díaz, reyista y corralistas; una inclinación en la sociedad hacia el cambio en el poder, en forma de participación civil en la esfera urbana y de sectores sociales medios y ricos; la acción de una personalidad activa y unificadora de las tendencias relativamente moderadas al cambio, Francisco I. Madero; la organización de un partido político nacional de oposición para las elecciones de 1910, el Partido Nacional Antirreeleccionista; la incapacidad del sistema de poder para reconocer el peso político y social de la oposición, demostrada en la represión y el fraude; la participación nacional reprimida en sus objetivos electorales provocó el derrumbe de la legitimidad porfiriana ante una porción significativa de la sociedad. La combinación de estos elementos produjo una crisis política, entendida ésta como conciencia de la necesidad de un cambio político fuera de los marcos institucionales, en sectores amplios de la sociedad.

La crisis política derivó en crisis político-militar por la conjunción de los siguientes aspectos: una voluntad de

rebelión entre los antirreeleccionistas, que fue puesta en acción aprovechando la organización política previa para el compromiso y acopio de armas; el régimen no advirtió pronto los efectos de su intransigencia, por lo que sólo tardamente intentó ganar la iniciativa a los insurreccionales, el movimiento se amplió geográfica y socialmente al campo y a sectores populares debido a las situación socioeconómica originada en el modelo de desarrollo porfiriano y al impacto ideológico del antirreeleccionismo; la frontera norteamericana fue un espacio social y políticamente favorable para la propaganda, acopio de armas y reclutamiento de los rebeldes, de gran importancia para el movimiento; el ejército federal no estaba preparado para enfrentar un movimiento disperso geográficamente, y esa debilidad relativa se hizo cada vez mayor; las medidas políticas del gobierno para contener los levantamientos, cerradas primero al diálogo y conciliatorias por fuerzas más tarde, fueron inútiles; la proliferación de grupos insurrectos en casi todo el país y el paso de los más importantes de una guerra de guerrillas a una de posiciones hizo creciente la debilidad relativa del ejército, que fue obligado a replegarse a las ciudades más importantes. Por último, la destrucción inminente del ejército federal fue evitada con la renuncia de Porfirio Díaz, que perdió su poder personal a cambio de conservar lo que todavía se sostenía en pie del sistema.